

TRIBUNA

Joan Carles Gallego*Secretario general de CC.OO. Catalunya*

Que paguen

Nuestra crisis es profunda y duradera y requiere una política fiscal expansiva que utilice el margen de endeudamiento y aumente la inversión y el gasto público. Déficit presupuestario y más ingresos públicos son necesarios (y compatibles) para que el sector público reactive la economía, ayude a sectores viables y competitivos, impulse actividades que creen empleo, garantice la prestación social a personas en paro y desarrolle y mejore los servicios públicos. Se precisa una reforma fiscal que aumente la presión fiscal y corrija las medidas regresivas de estos últimos años: deducciones universales, como los 400 euros o el cheque bebé; supresión de figuras impositivas; cambios de tipos impositivos, como la bajada del tipo marginal del IRPF o de las rentas del capital; o el favorable e injusto trato a las sicav. Hay que dotar al sistema de más suficiencia y mayor equidad. No es justo fiscalmente un sistema en que pesa más la imposición indirecta que la directa, que grava más las rentas del trabajo que las del capital, y que suprime impuestos como patrimonio o sucesiones. Queremos una reforma fiscal que dé suficiencia y equidad, orientada a mejorar la redistribución de riqueza, que permita una provisión de bienes y servicios públicos universales y de calidad que eviten la exclusión social y superen las trabas a la promoción social de las clases más desfavorecidas.

Es necesario superar la regresividad del sistema y garantizar ingresos para hacer políticas públicas avanzadas, que nos homologuen a Europa, de la que nos separan aún 7 puntos de PIB en gasto social. No valen los prejuicios

Urge una política fiscal progresista que nos lleve hacia un modelo de cohesión social

contra la subida cuando no hay alternativa a una fuerte intervención pública para reactivar la economía. No es posible, ni justo fiscalmente, que el coste de la crisis recaiga en exclusiva sobre

el factor trabajo, que hoy contribuye más vía IRPF o IVA y mañana sufrirá los efectos de la inflación sobre el salario. Convertir ahorro privado en ahorro público debe permitir orientar la inversión y el gasto público a la reactivación económica y a la protección social. Necesitamos una reforma fiscal progresista, que replantee figuras y tipos impositivos y oriente y dote de recursos la inspección fiscal contra el fraude y la economía sumergida. Hay margen para una reforma más ambiciosa, que grave las rentas altas y grandes fortunas y que utilice impuestos especiales para el cambio de modelo productivo. Así se contribuye a una salida de la crisis más equilibrada avanzando hacia un modelo de cohesión social. Si queremos repartir los costes de la crisis, quien más ha ganado en los años de crecimiento es justo que ahora contribuya más.